



La presente obra está bajo una licencia:
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY-NC 2.5)
Para leer el texto completo de la licencia, visita:
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/>

Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:



Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciente (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.

Las necesidades de reentrenamiento de Fuerza Pública para la reparación de las víctimas.¹

Grey Bibiana Cuervo Del Rio²

Universidad Católica de Colombia

Resumen

Colombia actualmente atraviesa un momento muy importante en su historia, con la firma e implementación de los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, uno de los puntos más importantes que se pretende analizar en este artículo de reflexión es el de Justicia para las víctimas. Las décadas de conflicto armado que ha vivido Colombia han dejado como consecuencia un número considerable de víctimas, dentro del acuerdo firmado se encuentra un punto específico que se refiere a la reparación de las víctimas y todo el proceso que se implementará respecto al mismo. Este artículo de investigación presenta un análisis de las medidas planteadas en el proceso de paz firmado con la guerrilla de las FARC-EP para la reparación de las víctimas en el marco del postacuerdo realizando una comparación con las medidas que se plantearon en un momento determinado en el proceso de justicia y paz y la efectividad de las mismas.

Palabras clave: Reparación Integral, Postacuerdo, Conflicto Armado, Derechos Humanos, Acuerdo de Paz, Colombia.

Abstract

Colombia is currently going through a very important moment in its history, with the signing and implementation of the peace agreements signed with the FARC guerrilla, one of the most important points and which is intended to analyze in this article of reflection is the of Justice for the victims. The decades of non-international armed conflict (CANI) that Colombia has experienced have left as a consequence a considerable number of victims, within the signed

¹ Artículo de Investigación para optar por el Título de Abogada de la Universidad Católica de Colombia bajo la Dirección de la Dra. Paola Alexandra Sierra Zamora.

² Estudiante de Derecho con materias culminadas, perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, identificada con código estudiantil No 2108563. Correo electrónico: gbcuervo63@ucatolica.edu.co

agreement there is a specific point that refers to the reparation of the victims and the whole process that will be implemented the same. This research article presents an analysis of the measures proposed in the peace process signed with the guerrilla FARC-EP for the reparation of the victims in the post-conflict framework, making a comparison with the measures that were proposed at a specific moment in time the justice and peace process and the effectiveness of them.

Keywords: Reparation to victims, Post-conflict, Armed Conflict, Human Rights, Peace Agreement, Peace Process.

Introducción

Teniendo en cuenta el proceso de implementación del acuerdo de paz en Colombia, resulta relevante identificar los avances que se han presentado en el contexto de reparación a víctimas del conflicto armado en razón a lo plasmado en las normas internacionales y locales³.

La importancia del análisis de las propuestas del punto de reparación a víctimas, permiten realizar críticas de manera que se puedan hacer correcciones en la forma de implementación de las mismas, cabe resaltar que una de las formas de lograr una paz estable es resarcir los daños causados a las víctimas desde los puntos de justicia, verdad, reparación y no repetición, de igual manera es necesario establecer que los criterios de reparación colectiva este de acuerdo a las necesidades, creencias y arraigos culturales de cada comunidad.

El Congreso de la Republica expidió la Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones, así mismo se han implementado criterios de reparación a víctimas que corresponden con las exigencias del derecho internacional, es así como mediante la creación de entidades como la Unidad de víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la

³ Para más información, véase: Cubides, Vivas y Sierra (2018). Exordio conclusivo: de la responsabilidad internacional y la protección ambiental. En: Cubides & Vivas (2018). Responsabilidad Internacional y protección ambiental: en tiempos de paz, en medio del conflicto armado y en etapas de posconflicto. Colombia: Universidad Católica de Colombia. p.311 – 316.

Agencia Colombiana para la Reintegración, entre otras se ha buscado realizar un trabajo serio y consiente que permita la reparación integral de las víctimas.

Lo anterior tiene que ver con el reto que enfrenta Colombia para la implementación y puesta en marcha del acuerdo de paz, es de vital importancia para que se pueda constituir una paz sostenible y duradera, que permita a los ciudadanos colombianos tener una paz duradera y estable.

Es necesario entonces, fomentar espacios en la sociedad de inclusión y reconciliación, ya que esto permitirá que los ciudadanos vean las consecuencias del conflicto armado de una forma más cercana y se involucren de manera activa en la etapa del postacuerdo.

Así mismo, es procedente realizar una revisión de la estructuración de la fuerza pública en las zonas de posconflicto, ya que, esto representa un elemento clave en la estabilidad de la paz. De acuerdo a los argumentos expuestos anteriormente, el presente artículo de investigación busca responder la pregunta de ¿Cuál es el rol de la fuerza pública en Colombia dentro del marco del posacuerdo y los procesos de reparación integral a las víctimas desarrollados en el acuerdo de paz con las FARC- EP?

La metodología utilizada en el desarrollo del presente artículo de investigación es de tipo documental de análisis síntesis de tipo cualitativo realizada a partir de la consulta de normas, doctrina y experiencia en procesos de posacuerdo de paz realidades del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.

El objetivo principal que desarrolla el presente artículo de investigación es determinar los cambios que deben presentarse en la fuerza pública colombiana en el posacuerdo, específicamente en el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado que se adelanta hoy por hoy en Colombia.

1. Generalidades del acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.

El acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, aborda aspectos importantes frente a la reparación a víctimas del Conflicto Armado No Internacional

(en adelante CANI) que tuvo lugar en Colombia, entre las fuerzas armadas y los grupos armados ilegales que por varios años controlaron parte del territorio nacional.

En la actualidad, los puntos tratados en el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC – EP abarcan varios temas importantes, que van desde la reforma rural integral, hasta la participación en política de miembros de este grupo armado Cáceres (2013), indica lo siguiente respecto al tema de reparación a víctimas en el contexto del CANI en Colombia:

En otras palabras, no se podría formular la implementación de una política legislativa y pública de justicia transicional si no se van a establecer condiciones reales de transformación social que representen cambios estructurales en la vida social, política y económica del Estado y si no se van a garantizar medios para hacer efectiva la justicia social material pregonada desde la filosofía dogmática del Estado Social de Derecho, pues de lo contrario, se abordaría una transición sin haber salido del estado inconstitucional de crisis social y humanitaria que ha ido de la mano del conflicto mismo durante las últimas décadas en Colombia (p. 79).

Ahora bien, de acuerdo a la realidad concreta y actual de Colombia, Gómez (2017) indica que el proceso de paz llevado a cabo es resultado de una negociación política que abrió paso a un camino para la reconstrucción de la paz en Colombia y el replanteamiento de los lazos sociales en Colombia. Todo lo anterior requiere de una serie de esfuerzos de las entidades del Gobierno en cuanto a la implementación efectiva de cada uno de los puntos que se negociaron dentro del acuerdo.

La figura 1 permite identificar los ejes de dicho acuerdo, lo que resulta esencial para el tema objeto de estudio del presente artículo de investigación.

Figura 1. Puntos centrales acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC- EP



Fuente: Elaboración propia (2018).

Como se puede observar en la figura 1, los temas que se incluyeron dentro del acuerdo de paz son diversos y abarcan varias materias importantes que se conciben como causas importantes de la inconformidad social en Colombia, por lo que se consideran temas concretos a tratar para el desarrollo de una paz estable y duradera.

En ese sentido, como lo asegura Olaya (2017) la implementación efectiva de los puntos del acuerdo de paz requiere un análisis de los territorios que se han sido víctimas del conflicto armado. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichos territorios requieren un espacio de diálogos que permitan desarrollar nuevos espacios sociales, en zonas que históricamente se han considerado como abandonadas por el Estado colombiano.

2. Reparación a víctimas desde la óptica del derecho internacional

La reparación a víctimas es un concepto que ha sido abordado desde la óptica internacional desde el siglo XX en esa medida se han enfocado en determinar una serie de criterios para la

reparación integral de víctimas, esto a consecuencia de los hechos acaecidos durante la primera y segunda guerra mundial.

Es procedente indicar que Tribunal Permanente de Justicia Internacional hizo referencia a la reparación en el año 1927, cuando manifestó la obligación del Estado de reparar a los dueños de una fábrica ubicada en Polonia que había sido objeto de expropiación. Manifestando lo siguiente “es un principio de derecho internacional, e incluso un concepto general del derecho, que cualquier incumplimiento de un compromiso entraña la obligación de efectuar una reparación” (Núñez & Zuluaga, 2012).

Así mismo, como lo indica Becerra (2016) este pronunciamiento se centra concretamente en la responsabilidad internacional por daños ocasionados como consecuencia del incumplimiento del orden jurídico internacional instaurado previamente, por lo tanto y atendiendo los daños causados por este hecho se considera necesario que se realicen las reparaciones correspondientes a las que tienen derecho quienes sufren los daños por el incumplimiento de los acuerdos internacionales.

Posteriormente, se han venido integrando nuevos criterios sobre el desarrollo de procesos de reparación integral a víctimas. En ese sentido cabe resaltar que el derecho internacional ha regulado el concepto de reparación a víctimas desde varias declaraciones, tratados internacionales, que como lo indica Vera (2008) hacen referencia a las medidas materiales de reparación como lo son la restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición y simbólicas como lo son la satisfacción moral, satisfacción judicial, satisfacción memorial. Lo anterior se ha convertido en un imperativo moral internacional para todo proceso relacionado con la búsqueda reparación integral a víctimas.

Sobre este tema, la Corte Constitucional ha indicado en su Sentencia C-344 de 2017, lo siguiente:

La jurisprudencia constitucional ha entendido que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación están estrechamente relacionados y son interdependientes, a tal punto que la protección de alguno contribuye a la realización de los otros. Así, tratándose del derecho a la reparación integral, haciendo suyas las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido la Corte Constitucional que: Es de reiterar que la jurisprudencia de la Corte IDH ha destacado la conexión intrínseca existente entre el

derecho a la reparación y el derecho a la verdad y a la justicia, señalando en reiteradas oportunidades que el derecho de las víctimas a conocer lo que sucedió, a conocer los agentes de los hechos, a conocer la ubicación de los restos de sus familiares, así como también el derecho a la investigación de los respectivos hechos y la sanción de los responsables, hace parte de la reparación integral de las víctimas y constituye un derecho que el Estado debe satisfacer a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad como un todo (Corte Constitucional, Sentencia C-344 de 2017)

Lo anterior con el fin de dejar claros los criterios que se deben tener en cuenta por los Estados en el desarrollo de procesos de reparación integral. Al respecto se la Comisión Colombiana de Juristas (2007) asegura que los principios internacionales sobre el derecho de las víctimas ha hecho evidente las obligaciones internacionales de los Estados sobre la materia de reparación integral a víctimas. Así mismo, cabe aclarar, que, al momento de plantear las estrategias de reparación a víctimas, el Estado debe tener en cuenta los principios constitucionales y convencionales del ordenamiento jurídico colombiano.

Debe tenerse en cuenta que se deben acoger los preceptos de reparación a víctimas que han sido dados por fuentes del derecho internacional público, como los tratados internacionales, tanto los generales como los particulares; costumbre internacional; los principios generales de derecho reconocidos por naciones civilizadas; y, como medio subsidiario para la determinación de las reglas, las decisiones judiciales y la doctrina producida por los autores de mayor reconocimiento (Comisión Colombiana de Juristas, 2007) (Cubides, Sierra & González, 2017)⁴.

Resulta necesario entonces analizar con detenimiento los pronunciamientos realizados en el derecho internacional sobre la reparación a víctimas, a continuación, serán descritos las herramientas más importantes dentro del concepto de reparación.

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 63.1 ha expresado lo siguiente:

⁴ Para más información y vertiente del tema, consúltese: Cubides, Sierra & González (2017). Acceso a la Justicia para mujeres víctima de violencia y discriminación con enfoque de género en los precedentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En: Martínez, A. (2017). Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Colombia: Ediciones Nueva Jurídica. pp. 256 - 283

Artículo. 63.1 Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

En ese sentido, la CIDH se ha referido en varias ocasiones a las medidas de reparación que deben ser ejercidas por el Estado responsable, para lograr una indemnización y reparación integral del daño sufrido. En esa medida es necesario analizar el caso concreto para determinar las particularidades de los daños sufridos⁵.

Lo anterior, ya que como lo indica Calderón (2013) una vez identificados los daños específicos que ha sufrido cada víctima, se deben identificar las medidas de reparación adecuadas para reparar de manera integral los daños de acuerdo a cada caso concreto. Dichas medidas de reparación pueden ser de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos y determinar los responsables e indemnización compensatoria.

a. Principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones:

La Organización de Naciones Unidas mediante la Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005 realiza una amplia exposición del tema de reparación a víctimas. En el anexo de esta resolución se determinan los principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario.

A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con

⁵ Sobre el procedimiento, véase: Cubides, Sierra & Carrasco (2016). El Control De Convencionalidad: Aspectos Generales En El Sistema Interamericano De Derechos Humanos Y En El Derecho Colombiano. En: El Control de Convencionalidad (CCV): Fundamentación e implementación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Colombia: Universidad Católica de Colombia. pp. 41 – 75.

el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización (ONU, Resolución 60/147, 2005).

En este documento la ONU hace referencia a la necesidad de generar espacios y estrategias de reparación a las víctimas y recomienda a los Estados tener en cuenta aspectos materiales e inmateriales cuando se realicen procesos de reparación, teniendo en cuenta los Estados parte están obligados a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de modo que su actuar debe orientarse a la garantía de dichos derechos.

La Resolución de la ONU 60/147, 2005 expone entonces una serie de principios que deben adoptarse para procesos de reparación a víctimas, entre estos se encuentran el acceso a la justicia, la disposición de recursos, la reparación de daño causado y el acceso a la información.

En esa medida, la Corte Interamericana de Derechos humanos ha expresado mediante varias de sus sentencias los criterios fundamentales en los procesos de reparación a víctimas, indicando que en todos los casos se debe analizar concretamente el daño sufrido y la medida adecuada para su reparación (Calderón, 2013). En ese sentido, en los casos sometidos a la jurisdicción de la CIDH se han avanzado en la doctrina jurídica desarrollada respecto del derecho a la reparación, la CIDH ha elaborado una serie de herramientas y medidas de reparación a partir de la integralidad de la personalidad de las víctimas y sus necesidades concretas. Debe dejarse claro entonces que la reparación de violaciones a los derechos humanos puede abarcar una serie de matices que dependen de la gravedad de la violación (López, 2009).

b. Reparación en procesos de justicia transicional:

En consonancia con los parámetros de reparación expuestos anteriormente, cabe resaltar que en el caso concreto de reparaciones dentro de un proceso de justicia transicional⁶ se deben

⁶ Para más información, véase: Cubides & Sierra (2018). Reparación Integral de las Víctimas en la Justicia Transicional: Historia, Debate y actualidad dentro del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. En: Derecho Procesal Constitucional. Codificación Procesal Constitucional. Colombia: Asociación Nacional de Derecho Procesal Constitucional

trazar estrategias para el acceso a los criterios verdad, justicia y reparación y no repetición. El desarrollo de estos procesos busca en general proveer justicia a las víctimas por medio de unas instituciones y reglamentos temporales dispuestos para tal fin (Casas & Herrera, 2008).

Para concretar lo expuesto anteriormente debe entender el derecho a la verdad, como lo expresa González (2012) quien afirma que es un derecho individual, y a la vez que colectivo, que impone una serie de deberes determinados a cargo de los Estados, en particular, el de investigar y esclarecer los hechos, el de individualizar a los responsables por los mismos y el de difundir públicamente dicha información, en el marco de los procesos de justicia transicional dichas obligaciones se extienden a los actores que hacen parte del proceso. Ejemplo de lo anterior, es el establecimiento posterior a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC – EP de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Cubides & Sierra (2017) hacen referencia a la importancia de las comisiones de la verdad que están diseñadas para llevar a cabo la investigación de violaciones de Derechos Humanos o Derecho Internacional Humanitario, estas tienen el propósito de descubrir la verdad, a partir de fuentes directas y mediante el uso científico. Ahora bien, se debe tener en cuenta que el derecho a la justicia es un componente fundamental en la reparación integral a víctimas.

En ese sentido, cabe resaltar que el derecho a la justicia por su parte busca que sean castigados los responsables de las conductas punibles a las que fueron sometidas las víctimas. No obstante, lo anterior Gómez (2011) señala que debe observarse este derecho desde una óptica integral, y debe ser concebido como el derecho a la no repetición, a la verdad procesal y material sobre los hechos, y a la restauración de las pérdidas económicas, morales o inmateriales que se presentaron.

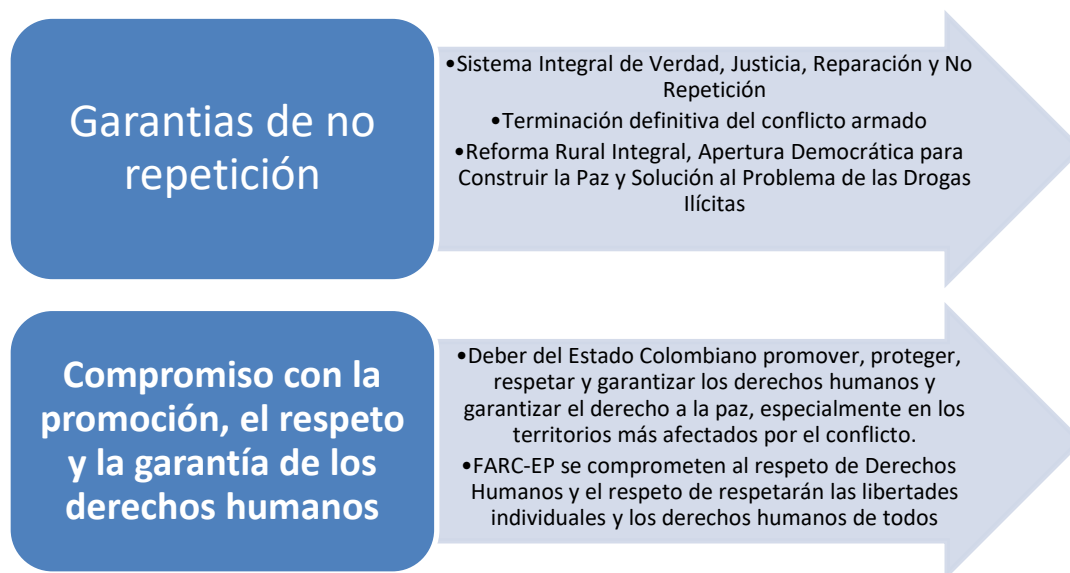
Debe tenerse en cuenta que en materia de reparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado al Estado responsable que sean pagadas indemnizaciones compensatorias, además del reintegro de costas y los gastos, y la adopción de medidas de rehabilitación y satisfacción de la víctimas, en el caso concreto de Colombia, en diversas ocasiones se ha ordenado al Estado Investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables y adicionalmente reparar los daños sufridos por las víctimas (Chacón, 2015) (Cubides, Suárez & Sierra, 2018, pp. 164 – 186).

Teniendo en cuenta el momento histórico que vive Colombia en el marco del proceso de posacuerdo y justicia transicional se ha trazado como un elemento fundamental el componente de reparación integral a víctimas en la medida de que contribuye a la reconciliación de la sociedad con los actores armados. Al respecto, se ha expresado lo siguiente:

Los significados construidos por la personas víctimas en torno a sus expectativas frente a la verdad, la justicia y la reparación, en sus diferentes mecanismos, difieren en función de sus características socio-culturales, políticas e ideológicas, económicas, étnicas, de género, del ciclo vital, y del tipo de victimización sufrido, por lo que resulta fundamental idear y ejecutar acciones adecuadas y no victimizantes para aproximarse a dichas significaciones en aras de lograr procesos de reparación realmente eficaces y, sobretudo, dignificantes. Es imperativo que dichas acciones obedezcan a una mirada regional y diferencial (Villa, Londoño & Barrera, 2015, p. 233).

En el posacuerdo se establecieron garantías de no repetición y compromisos con la promoción, el respeto y la garantía de Derechos Humanos, como se observa a continuación en la figura 2:

Figura 2. Medidas de no repetición y compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de DD.HH.



Fuente: Elaboración Propia (2018).

Ahora bien, cuando se hace referencia a las garantías de no repetición en el marco de procesos de reparación a víctimas es preciso que el Estado precise acciones determinadas que permitirán que no se vuelvan a repetir los actos violentos que dieron lugar a la violación de derechos humanos.

Como lo indican Sierra & Cubides (2017) Colombia en la actualidad se enfrenta al desarrollo de los mecanismos de transición propuesto en el acuerdo de paz firmado, en lo que debe garantizar que se logren superar las consecuencias de conflictos y así mismo debe facilitar la terminación de los mismos.

Teniendo en cuenta que es obligación del Estado garantizar la seguridad de la población civil, se hace necesario que se mantenga una presencia notoria de la fuerza pública en municipios que antes concentraban alta presencia de miembros de las FARC, teniendo en cuenta que aún en Colombia existen actores armados que amenazan la seguridad de la población, por lo resulta necesario que se defina la estructura que tendrá la fuerza pública y la presencia de la misma en ciertas zonas del país.

La Corte Constitucional en sus sentencia C-579 de 2013 ha indicado lo siguiente:

El derecho a obtener una reparación integral implica el deber de adoptar distintas medidas orientadas a la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas. Tales medidas han de incluir cinco componentes básicos: (1) la restitución plena, hace referencia al restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la violación, incluyendo la restitución de las tierras usurpadas o despojadas. De no ser posible tal restablecimiento pleno, es procedente (2) la compensación a través de medidas como la indemnización pecuniaria por el daño causado. La reparación integral incluye otras medidas como (3) la rehabilitación por el daño causado, mediante la atención médica y psicológica, así como la prestación de otros servicios sociales necesarios para esos fines; (4) la satisfacción, a través de medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las víctimas; al igual que (5) garantías de no repetición, para asegurar que las organizaciones que perpetraron los crímenes investigados sean desmontadas y las estructuras que permitieron su comisión removidas, a fin de evitar que las vulneraciones continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan.

Así entonces, la garantía de no repetición es una herramienta que tiene por función evitar que los hechos que dieron lugar a una violación de los derechos humanos no vuelvan a suceder. Ha sido clara también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que la aplicación de estas medidas son temporales, por ser propias de la justicia transicional (Duque Morales & Torres Restrepo, 2015, p. 271).

Como se indicó anteriormente, las garantías de no repetición son un trabajo conjunto de la entidad de gobierno, los ciudadanos y la fuerza pública que debe entender que desempeña una labora de operaciones de mantenimiento de la paz y resguardo de la ciudadanía.

3. La fuerza pública y las operaciones de mantenimiento de la Paz en Colombia

La fuerza pública jugara un papel muy importante en el proceso de posacuerdo, de este modo que es necesario pensar en cómo se reestructurara su presencia en zonas rurales y cuáles son las funciones que cumplirá dentro del territorio. La integración de excombatientes resultaría un proceso adecuado teniendo en cuenta que esto representa una inclusión importante en la sociedad.

Así mismo, es procedente realizar una revisión de la estructura de la fuerza pública en las zonas de posconflicto, ya que, esto representa un elemento clave en la estabilidad de la paz, al respecto es necesario evidenciar la figura 3 que describe una propuesta de la Fundación Ideas Paz (2015):

Figura 3. Fuerza Pública en el postacuerdo colombiano.



Fuente: Elaboración propia (2018).

Como lo indica la Fundación Ideas para la Paz (2005) el escenario de seguridad en el país, posterior a la implementación el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC – EP tendrá un cambio representado en la disminución de las amenazas a la seguridad interior provenientes de esos grupos armados, sin dejar de lado las amenazas que representan para las comunidades los grupos de crimen organizado que pueden afectar directa e indirectamente varios de los derechos humanos fundamentales de los colombianos, como la vida, la libertad personal y la propiedad.

La importancia del análisis de las propuestas del punto de reparación a víctimas, permiten realizar críticas de manera que se puedan hacer correcciones en la forma de implementación de las mismas. Así también debe tenerse en cuenta a la fuerza pública, y cuáles son las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz que se desplegaran en el marco del postacuerdo.

Como lo Indica Vallejo (2013) los conflictos tienen una serie de causas que deben ser analizadas y en torno a estas se deben desarrollar las estrategias en cuanto a las operaciones

En la actualidad, los conflictos no internacionales que se presentan obedecen en gran medida a razones propias de cada Estado, no se presentan con el fin de invadir territorios y expandir los Estados, por el contrario, las causas más frecuentes son creencias políticas, religiosas,

étnicas y otras, que tienen su razón de ser en las raíces históricas de cada pueblo y de cada cultura enfrentada. Esta variación en los conflictos mundiales ha permitido que las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz se enfoquen de manera diferente (Vallejo, 2012).

Una vez en la fase del posacuerdo es necesario cambiar la estrategia de la fuerza pública considerando los cambios que se producen en el desescalamiento del conflicto armado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta también que subsisten en varias partes del territorio del país organizaciones de crimen organizado, que la fuerza pública debe combatir, para garantizar los derechos de la población civil.

En esa medida han surgido diversas críticas ya que no se definió con certeza el papel de los miembros de la Fuerza Pública en el escenario del posacuerdo, lo anterior genera cierta inseguridad jurídica respecto del desarrollo de las funciones de estos y así mismo del futuro teniendo en cuenta la connotación del cumplimiento legítimo de las funciones de los miembros de la fuerza pública, todo esto teniendo en cuenta que pese a que se firmó el acuerdo de paz, persisten una serie de amenazas para la seguridad de los ciudadanos (Sierra, Cubides & Núñez, 2017).

Del mismo modo Martínez (2014) indica que los cuerpos de policía en Colombia deben tener una evolución en el marco del posacuerdo, teniendo en cuenta que las normas de la policía se construyen para conservar la paz pública. La policía está en capacidad de limitar los derechos de los individuos cuando se perturba la paz pública. En ese sentido la función de este cuerpo de seguridad en el marco de la implementación del proceso de paz tendrá una finalidad exclusiva: el logro de la convivencia ciudadana.

De igual manera es necesario que se realice una caracterización asertiva de las víctimas para establecer medidas de reparación en el posacuerdo, debe tenerse en cuenta que dentro de esas víctimas se encuentran también miembros de la fuerza pública. En esa medida como indica Mejía Azuero (2017) la diferenciación de las víctimas de la fuerza pública debe incluir además del reconocimiento y la reparación integral de las víctimas, y una vez satisfechos sus derechos a la verdad, justicia, no repetición y establecidas garantías de satisfacción, se debe realizar un proceso de redignificación de la familia policial y militar.

3.1 Cambios en las funciones de la fuerza pública

Franco (2016) en su análisis sobre los cambios de la fuerza pública en el posacuerdo expresa la necesidad de reformar la doctrina y la composición de la fuerza pública y enfocarla en la protección y la garantía de los derechos ciudadanos, cambiando así la mentalidad de las fuerzas armadas.

Los Grupos Delictivos Organizados (en adelante GDO) y los Grupos Armados Organizados (GAO) tienen un control social en los territorios donde logran concentrar sus economías criminales (Gutiérrez, Tobón, Suarez, Vanegas & Duncan, 2016). Así mismo estas organizaciones han tomado el control del negocio del narcotráfico, lo que ha generado el aumento de cultivos ilícitos y hechos de violencia focalizados en ciertas zonas de Colombia

De igual manera es necesario tener en cuenta que, la fase de implementación del acuerdo de paz presenta en su fase inicial una serie de características que se han determinado desde la experiencia internacional, entre estas se encuentran la posibilidad de aumento de la protesta social, que surge como consecuencia de las mayores exigencias que se presentan al Gobierno teniendo en cuenta que su prioridad ya dejó de ser el Conflicto Armado No Internacional. Así mismo, se presenta la reincidencia delictiva de algunos de los desmovilizados de los grupos armados, y aumenta la percepción general de inseguridad en el territorio (Carvajal, 2004).

Visto y lo anterior, y con fin de desarrollar el tema de una manera más completa se procederá a analizar por separado los cambios necesarios en las fuerzas militares y la policía nacional a continuación.

3.1.1 Papel de la Policía Nacional en el posacuerdo:

En Colombia, si bien la Policía Nacional se consideró en el artículo 218 de Constitución Política de 1991 como un cuerpo armado de naturaleza civil que tiene a su cargo mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades concedidas a los ciudadanos y asegurar la convivencia pacífica, el CANI ha hecho necesario que se le asignen otro tipo de funciones por lo cual se ha desnaturalizado dicha esencia.

Respecto de lo anterior Cruz (2017) asegura que la militarización de los cuerpos de policía representa una de las preocupaciones en las etapas de posacuerdo, ya que los roles de la fuerza pública se ven sometidos a diversos cambios que deben implementarse desde la academia policial en los ámbitos institucional, operativo y doctrinal.

Lo anterior plantea un desafío necesario, teniendo en cuenta que la Policía Nacional desempeña un papel fundamental dentro del posacuerdo, para el mantenimiento de la convivencia pacífica y convertirse en un garante de los Derechos de la ciudadanía y generando una percepción de seguridad en la misma.

3.1.1 Papel de las fuerzas militares en el posacuerdo:

Las Fuerzas militares en el contexto del posacuerdo representan un papel fundamental en el mantenimiento de la paz, en esta medida deben ser capacitados y orientados de manera correcta de acuerdo a los fines del Estado, sin dejar de lado que es necesario que se garanticen los derechos de los ciudadanos.

No obstante, es preciso mencionar que la justicia transicional planteada para el posacuerdo en Colombia presenta una serie de desventajas para los miembros de las fuerzas militares, ya que no se tienen criterios igualitarios para el juzgamiento de delitos que se hayan dado en el marco del conflicto armado en Colombia (Mejía Azuero, 2014). Adicionalmente no es lógico que los militares sean sometidos a las mismas reglas dentro de la justicia especial para la paz, teniendo en cuenta la legalidad de la institución, que es como en principio se concibió.

No obstante, lo anterior no quiere decir que se vulneren los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ya que en los casos de delitos cometidos por integrantes de la fuerza pública que se encuentren por fuera del marco del conflicto armado debe entrar a operar la justicia ordinaria como instancia de juzgamiento, como lo ha referido la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

En cuanto a la necesidad de adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, la Corte estima que en caso de que el Estado considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia

material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales militares (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, 2005).

De igual manera, se ha dejado de lado que los miembros de la fuerza pública han sido víctimas en el desarrollo del conflicto armado, como bien lo indica Mejía Azuero (2016) no puede dejarse de lado la condición de ser humano del miembro de la fuerza pública, por la posición que este tiene en combate, por lo tanto los hechos desarrollados en el marco del conflicto representan para estos una repercusión en la valoración de su dignidad humana y su condición de ciudadano, lo que no es admisible en un contexto como el que han vivido los militares en Colombia.

Conclusiones

Teniendo en cuenta los preceptos internacionales y locales sobre reparación integral de víctimas, en el contexto del posacuerdo en Colombia debe integrarse a la fuerza pública como garante de estos procesos, con el fin de mantener las condiciones de seguridad y paz en el territorio.

Así entonces, este artículo de reflexión permite concluir que la fuerza pública debe desempeñar un rol de garante sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia, considerando que en algunas zonas del país persiste la presencia de grupos armados organizados y grupos delictivos organizados. De igual manera se ha intensificado el cultivo de sustancias ilícitas en el país por parte de las disidencias de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (en adelante ELN).

Es deber de la fuerza pública entonces, involucrarse dentro de los procesos de reparación a víctimas siendo garante de la seguridad y convivencia ciudadana en el país. Por lo tanto, el Gobierno debe disponer de herramientas necesarias para que procesos como los de restitución de tierras y titulación de predios gocen de todas las garantías posibles, en el marco del posacuerdo, para evitar que de nuevo las víctimas sean sujeto de amenazas y vulneración de sus derechos como propietarios.

En ese contexto debe tenerse en cuenta que la instrucción de los policías y militares del país debe orientarse ahora en la protección de los derechos fundamentales y las operaciones de

mantenimiento de la paz. En ese sentido, es necesario que estas instituciones recuperen la confianza de los ciudadanos, por lo que se debe fortalecer su capacitación en valores, ética y Derechos Humanos.

Si bien, hoy en día el desescalamiento del postconflicto permite a la fuerza pública concentrarse en otros aspectos de la seguridad del país, deben priorizarse temas fundamentales en el mantenimiento de la paz como lo es la protección a los líderes sociales y sindicales, la participación activa en actividades de las comunidades para evidenciar la presencia del Estado, la protección del medio ambiente combatiendo fenómenos como la tala indiscriminada y la minería ilegal, entre otros.

Por lo tanto, el campo de acción de la fuerza pública en el posacuerdo se ha ampliado de manera relevante, y exige que sus miembros estén capacitados en otras especialidades diferentes al combate y la guerra.

Referencias

- Becerra, Z. (2016). La obligación de reparar como principio del derecho internacional. *Revista Jurídica De La Universidad De León*, 3 (1). Recuperado de <http://revistas.unileon.es/index.php/juridica/article/download/5016/3857>
- Cáceres, E. (2013). Justicia transicional y derecho a la reparación integral. Aproximación al caso colombiano. *Novum Jus*, 7 (2), 55-87. <http://dx.doi.org/10.14718/novumjus.2013.7.2.2>
- Calderón, J. (2013). La evolución de la reparación integral en la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos (1st ed.). México, D.F.: Instituto de investigaciones jurídicas UNAM.
- Carvajal, C. (2004). La Policía Nacional en el posconflicto. *Revista Criminalidad*, 47: 38-48. Recuperado de <http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2014/04/pos-conflicto-PONAL.pdf>
- Casas, A., & Herrera, G. (2008). El juego político de las reparaciones: un marco analítico de las reparaciones en procesos de justicia transicional. *Papel Político*, 13 (1), 197 - 223. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/papel/v13n1/v13n1a07.pdf>
- Chacón, N. (2015). Acatamiento de la medida de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables, por parte del estado colombiano en los fallos proferidos por la corte interamericana de derechos humanos. In N. Chacón, J. Cubides, L. Díaz, A. Martínez, D. Vargas, & T. Vivas (Ed 1.), *Eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos* (2ª ed., pp. 37–65). Bogotá, Colombia: Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2005) Caso Palamara Iribarne Vs. Chile del el 22 de noviembre de 2005. Recuperado de www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
- Cruz-Rodríguez, E. (2017). El posconflicto y la reforma de la Policía en Colombia: el problema de la desmilitarización. *Memorias*, 15 (27), 15-30. Recuperado de <https://revistas.ucc.edu.co/index.php/me/article/download/1732/2048>

- Cubides, J., & Sierra, P. (2018). Reparación Integral de las Víctimas en la Justicia Transicional: Historia, Debate y actualidad dentro del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. En: Derecho Procesal Constitucional. Codificación Procesal Constitucional. Colombia: Asociación Nacional de Derecho Procesal Constitucional. pp.631 – 644.
- Cubides, J., Sierra, P., & Carrasco C. (2016). El Control De Convencionalidad: Aspectos Generales En El Sistema Interamericano De Derechos Humanos Y En El Derecho Colombiano. En: El Control de Convencionalidad (CCV): Fundamentación e implementación desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Colombia: Universidad Católica de Colombia. pp. 41 – 75.
- Cubides J., Sierra P. & González M. (2017). Acceso a la Justicia para mujeres víctima de violencia y discriminación con enfoque de género en los precedentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En: Martínez, A. (2017). Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Colombia: Ediciones Nueva Jurídica. pp. 256 – 283.
- Cubides J., Sierra, P. & Núñez (2017). El Fuero Militar en el derecho colombiano vs el derecho ecuatoriano. En: El Fuero Militar: Justicia Interamericana y Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. Ed: La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova - Sello Editorial ESMIC. pp.64 – 81.
- Cubides J., Suárez L. & Sierra, P. (2018). El derecho internacional humanitario y la corte interamericana de derechos humanos en la protección de los derechos de verdad u justicia a las víctimas del conflicto armado interno colombiano. En: Cubides & Fajardo (2018). Cuestiones Dialécticas en torno a los derechos humanos y la paz. Brasil: Instituto Memoria Editora & Projetos Culturais.
- Cubides J., Vivas T., y Sierra P. (2018). Exordio conclusivo: de la responsabilidad internacional y la protección ambiental. En: Cubides & Vivas (2018). Responsabilidad Internacional y protección ambiental: en tiempos de paz, en medio del conflicto armado y en etapas de posconflicto. Colombia: Universidad Católica de Colombia. pp. 311 – 316.

- Duque Morales, C. & Torres Restrepo, L. (2015). Las garantías de no repetición como mecanismo permanente para la obtención de la paz. *Vniversitas Estudiantes Bogotá*, 12 (1), 269-290. Recuperado a partir de <http://cienciasjuridicas.javeriana.edu.co/documents/3722972/6187126/13+Duque-Torres.pdf/8217f4c5-f3e9-4ec1-9e3d-d7a9bf43b0d9>
- Franco, R. (2017). Fuerza pública, negociaciones de paz y postacuerdo en Colombia, de E. Cruz Rodríguez. *Revista Colombiana De Sociología*, 40 (1), 303-306. Recuperado de <https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/61964/58273>
- Fundación Ideas para la Paz (2015). La fuerza pública que requiere el postconflicto. Bogotá. Recuperado de: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5547dc7eef1110.pdf>
- Gómez, G. (2017). Entre el castigo y la reconciliación. Análisis socio jurídico del proceso de paz y la negociación del Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto. *Estudios Políticos (Universidad de Antioquia)*, 50, pp. 236-256. DOI: 10.17533/udea.espo.n50a13: Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n50/0121-5167-espo-50-00236.pdf>
- Gómez, L. (2011). Algunas consideraciones y perspectivas sobre el test de razonabilidad: tras las huellas de las víctimas en el sistema de verdad, justicia y reparación de derechos. *Díkaion*, 20 (1), 131-163. Recuperado de <http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1952>
- González, D. (2008). El derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico de carácter no-internacional. *International Law: Revista Colombiana de Derecho Internacional*, (12), 435-467. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=82420300016>
- Gutiérrez, I., Tobón, S., Suarez, C., Vanegas, M., & Duncan, G. (2016). La situación del narcotráfico en Colombia ad portas del postacuerdo. *Cuadernos De Trabajo En Gobierno Y Ciencias Políticas*, 13 (1). Recuperado de https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/9112/cuadernos_trabajo_eafit_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- López, C. (2009). Aproximación a un estándar de reparación integral en procesos colectivos de violación a los derechos humanos. *Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista Estudios Socio-Jurídicos. Universidad del Rosario* 11 (2): 301-334. Recuperado de <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/sociojuridicos/article/view/431>
- Martínez, C. (2014). Las fuerzas militares y de policía en el postconflicto colombiano. *Derecho Y Realidad*, 24 (2). Recuperado de https://revistas.uptc.edu.co/index.php/derecho_realidad/article/download/.../4241
- Mejía Azuero, J. (2014). El Fuero Penal Militar que necesita Colombia. *El Jurista del Fuero Militar Policial: Revista académica del Centro de Altos Estudios de Justicia Militar*, 4 89-98. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5211785>
- Mejía Azuero, J. (2016). El soldado ciudadano como víctima en el conflicto armado colombiano: descripción desde el derecho internacional humanitario. *Revista Ambiente Jurídico*, 20 (1). 165-200. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6101315>
- Mejía Azuero, J. (2017). Caracterización de las víctimas policiales en el contexto del conflicto armado en Colombia. *Analecta Política*, 7 (12), 117-138. Recuperado de <https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/7384>
- Núñez, R., & Zuluaga, L. (2012). Estándares internacionales de reparación de violaciones de derechos humanos: principios de implementación en el derecho colombiano. *Revista Análisis Internacional*, 6. Recuperado de <https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/viewFile/853/864>
- Olaya, L., & Naranjo, E., & Guevara, J. (2017). Producción espacial para lograr la paz en Colombia. *Revista VIA IURIS*, (22), 127-148. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=273954731008>
- ONU (2005). Resolución 60/147. “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer

recursos y obtener reparaciones. Recuperado de <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx>

Vallejo Almeida, G. (2012). Alcances de las operaciones de mantenimiento de la paz. *Novum Jus*, 6 (2), 9-28. Recuperado de http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatonica/revistas_ucatonica/index.php/Juridica/article/view/662/680

Villa, J., Londoño, D., & Barrera, D. (2015). Reparación a las víctimas de dictaduras, conflictos armados y violencia política en sus componentes de compensación, satisfacción, rehabilitación y no repetición. *El Ágora USB*, 15 (1), 217 - 240. Recuperado a partir de <http://www.redalyc.org/html/4077/407747671012/>

Jurisprudencia

Colombia, Corte Constitucional (2017). Sentencia C-344. M.P Alejandro Linares Cantillo, Bogotá.